

Santiago de Cali, 11 de abril de 2024

Doctora:
MONICA ISABEL ESCOBAR MARTINEZ
Juez Primero Administrativo Oral del Circuito de Cali
E.S.D.

ASUNTO:	CONTESTACIÓN DEMANDA
MEDIO DE CONTROL:	REPARACIÓN DIRECTA
RADICACIÓN:	76001-33-33-001-2023-00294-00
DEMANDANTE:	ELENA PATRICIA ACEVEDO RIVAS Y OTROS
DEMANDADO:	DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI

LUZ KARIME ROJAS CAMACHO, mayor de edad y vecina de esta ciudad, abogada de profesión y en ejercicio; identificada con Cédula de Ciudadanía N° 27.603.477 expedida en Cucuta (Norte de Santander) y portadora de la Tarjeta Profesional N° 156.065 del Consejo Superior de la Judicatura, con domicilio en la ciudad de Cali y dirección de notificaciones, en la Avenida 2 norte # 10 – 70 Centro Administrativo Municipal CAM, torre Alcaldía piso 9 – “Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública”, dirección electrónica lkrojasca@gmail.com, de manera respetuosa solicito a su Honorable Despacho se me reconozca personería jurídica para actuar, de conformidad con las facultades en el poder conferido, adjunto con sus respectivos anexos.

Dicho lo anterior y encontrándome dentro del término legal, me permito presentar CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA, en los siguientes términos:

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD QUE REPRESENTO:

Actúo en nombre y representación del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, representado por el Doctor ÁLVARO ALEJANDRO EDER GÁRCES, identificado con la cédula de ciudadanía número 94.453.964, en calidad de Alcalde, en ejercicio pleno de sus funciones, quien ha delegado la representación judicial del Distrito de Santiago de Cali a la Doctora MARIA XIMENA ROMAN GARCIA, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía número 66.811.466, en su condición de Directora del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública de la Alcaldía de Santiago de Cali, nombrada mediante Decreto No.4112.010.20.0001 de 01 de enero de 2024 y Acta de Posesión No. 016 de 01 de enero de 2024, delegación efectuada a través del Decreto No. 4112.010.20.0010 de enero 03 de 2024 “Por medio del cual se efectúa una delegación en materia de representación judicial, administrativa y extrajudicial, y se dictan otras disposiciones”, con facultad para conferir y/o revocar poderes especiales con las facultades de ley, circunstancia que acredito con la copia del referido Decreto, quien a su vez me confirió PODER ESPECIAL, para que actue dentro del proceso referido con la facultad





expresa de ejercer todas las acciones en defensa de los intereses del ente territorial en los términos del mandato a mi conferido y quienes para los efectos procesales tenemos como domicilio en la Avenida 2 norte # 10 – 70 Centro Administrativo Municipal CAM, torre Alcaldía piso 3 y 9 de la Ciudad de Santiago de Cali - Celular: 3185301471 Correo electrónico: lkrojasca@gmail.com, notificacionesjudiciales@cali.gov.co.

II. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS HECHOS DE LA DEMANDA:

Al Hecho PRIMERO: PARCIALMENTE CIERTO. En documentación aportada en el escrito de subsanación de la demanda es verificable la calidad de los menores Luciana Giraldo Acevedo y Jhon Sebastián Giraldo Acevedo (hijos). Contrario sucede con el señor Juan Esteban Gómez Giraldo de quien no se aporta la correspondiente prueba que acredite la familiaridad con la señora Elena Patricia Acevedo Rivas. Por tanto, en el respectivo acápite se propondrá la excepción de falta de legitimación en la causa por activa.

Al Hecho SEGUNDO: PARCIALMENTE CIERTO. De lo aportado con el escrito de demanda se advierte de un Registro del Estado Civil Digital de Matrimonio lo cual hace verificable la calidad de esposo del señor German Giraldo Orozco de la señora Elena Patricia Acevedo Rivas. Sin embargo, de dicho documento, ni de los aportados con la demanda se puede entrever la convivencia relacionada por el demandante, ya que en el citado registro aparece como año de celebración el 2021 (se advierte que no se evidencia claramente la fecha del citado acto nupcial, tan solo se puede apreciar el año).

Al hecho TERCERO: NO ME CONSTA. No se aporta dentro del escrito demandatorio prueba que demuestre este hecho. Por lo tanto deberá probarse como lo estipula el artículo 167 del C. G.P., concordante con el 173 ibídem.

Al Hecho CUARTO, QUINTO Y SEXTO: NO ME CONSTA. De las pruebas aportadas con el escrito demandatorio, entre los que se encuentra el informe policial de accidente de tránsito No. A001526299, el mismo no acredita lo señalado por la parte demandante ya que además de ser poco legible, el mismo se realizó aproximadamente 22 horas después del presunto accidente basada en versiones de supuestos testigos. Por lo tanto, deberá probarse como lo estipula el artículo 167 del C. G.P., concordante con el 173 ibídem.

Al hecho SEPTIMO: NO ES UN HECHO, me atengo a lo que quede probado dentro del proceso pues corresponde a una afirmación que realiza el apoderado de la parte demandante, lo cual es objeto del presente litigio y que debe ser probado.

Al hecho OCTAVO: NO ES UN HECHO Lo registrado no es un hecho constitutivo de la demanda relevante en este acápite.

Al hecho NOVENO: NO ES UN HECHO. La edad de la señora Elena Patricia Acevedo Rivas para la fecha de los hechos, no es un hecho constitutivo de la demanda relevante en este acápite.

Al hecho DECIMO: NO ME CONSTA De lo aportado con la demanda no se allega prueba que acredite tal hecho.

Al hecho DECIMO PRIMERO: NO ME CONSTA y que se pruebe amén de ello se presenta copia simple de la historia clínica a nombre de la señora Elena Patricia Acevedo Rivas donde someramente se puede observar no desde una órbita técnica, los procedimientos y tratamientos a los cuales fue sometida.

Al hecho DECIMO SEGUNDO: NO ME CONSTA. No fue allegada prueba que acredite dicha afirmación.

Al hecho DECIMO TERCERO, DECIMO CUARTO y DECIMO SEXTO: NO ME CONSTA DIRECTAMENTE. Por razones obvias ni el Distrito especial de Santiago de Cali, ni esta servidora debe conocer la veracidad de este hecho, por lo cual deberá ser demostrado en el proceso tal como lo demanda el artículo 167 del Código General del Proceso.

Al hecho DECIMO QUINTO: NO ME CONSTA me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso.

III. POSICIÓN FRENTE A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA:

En mi calidad de apoderada judicial del DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, desde ya debo manifestar que ME OPONGO a la prosperidad de las pretensiones impetradas por la parte activa, o quien represente sus derechos, por los perjuicios que supuestamente se le ocasionaron, como consecuencia de las lesiones y secuelas sufridas a raíz del presunto accidente de tránsito acaecido en fecha del 12 de abril de 2023, por cuanto de la evidencia allegada con la demanda, se podrá inferir que el Ente Territorial que represento, no se le puede enrostrar responsabilidad, por los presuntos daños sufridos por la demandante, señora ELENA PATRICIA ACEVEDO RIVAS.

Igualmente me opongo a que se condene administrativa y patrimonialmente a la Entidad Territorial demandada, a reparar o pagar a la señora ELENA PATRICIA ACEVEDO RIVAS y demás demandantes, cualquier suma de dinero a título de reparación, por los presuntos daños y perjuicios señalados en la demanda, por las razones que se expondrán en el presente escrito de contestación de demanda.

Ahora bien, frente al pago de costas, solicitada por la parte demandante, es importante traer a colación lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA estableciendo que su eventual condena y liquidación se regirá por lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso, CGP), A su vez, el ordinal 8 del artículo 365 del C.G.P., dispone que solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación. Para el caso concreto, no existen elementos de



prueba que demuestren o justifiquen las erogaciones por concepto de costas, razón por la cual solicito comedidamente no sean reconocidas.

De igual forma, el Consejo de Estado, en Sentencia del 7 de abril de 2016 – número interno 4492 de 2013 -, acogió el criterio objetivo para la imposición de costas (incluidas las agencias en derecho) al concluir que no se debe evaluar la conducta de las partes (temeridad o mala fe), sino los aspectos objetivos respecto de la causación de las costas, tal como lo prevé el Código General del Proceso, con el fin de darle plena aplicación a su artículo 365. En dicha oportunidad concluyó lo siguiente:

“El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar de un criterio [subjetivo] – CCA – a uno [objetivo valorativo] – CPACA. Se concluye que es [objetivo] porque en toda sentencia se “dispondrá” sobre costas, es decir se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP. Sin embargo, se califica de [valorativo] porque se requiere que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes. La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura). Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas, por lo que el Juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por éstas. La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el Despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP, previa elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial. Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia”.

Así las cosas, habiéndome opuesto a la declaratoria de responsabilidad del Ente Territorial por cuanto no existen en el plenario elementos de prueba que permitan al Juzgador de instancia avizorar la responsabilidad del Distrito Especial, mucho menos podría ordenarse el pago de una condena en los términos del artículo 192 del CPACA.

Por lo anterior, ME OPONGO a cada una de las pretensiones de la parte demandante, porque como quedará demostrado en el discurrir de la presente contestación, no existe relación de causalidad directa, inmediata y exclusiva entre el hecho y el daño que sea imputable al Distrito Especial de Santiago de Cali.

IV. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS PERJUICIOS RECLAMADOS EN LA DEMANDA:

Me opongo al reconocimiento de los perjuicios reclamados en la presente demanda por los motivos que a continuación expondré:

PERJUICIOS MATERIALES:

LUCRO CESANTE: Sobre la noción de los perjuicios materiales, el artículo 1614 del Código Civil, dispone:



“Entiéndase por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento; y por lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplido imperfectamente, o retardado su cumplimiento”. (cursiva y subrayas propias).

De acuerdo a lo anterior, el lucro cesante hace referencia a la ganancia que deja de percibirse, o la expectativa cierta económica de beneficio o provecho que no se realizó como consecuencia del daño.

Se registra en escrito demandatorio en la modalidad de Lucro Cesante Consolidado y Futuro la suma de NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL VEINTINUEVE PESOS MCTE (\$98.146.029), estimando lo dicho 1) en que al momento del accionante de transito la señora Elena Patricia Acevedo Rivas laboraba en la empresa FALABELLA donde devengaba la suma de \$1.160.000, y 2) en un calculo realizado por el apoderado de la citada parte de la perdida de capacidad laboral de la señora Acevedo Rivas de 30%.

Aspectos que para este Ente territorial no tienen soporte y/o prueba alguna, ya que i) en cuanto al valor que la demandante presuntamente devengaba por laborar en la empresa FALABELLA, no aparece certificado laboral que indique dicha vinculación laboral, y menos el valor que devengaba, y ii) no existe calificación de perdida de capacidad laboral expedida por una autoridad competente, tan solo dicho porcentaje es una aseveración que hace el apoderado de la parte demandante.

Además de lo anterior, no se demostró en juicio que la irregularidad en la vía (hueco) fue determinante en la producción del daño.

Es así su señoría que ante la orfandad probatoria que revisten los perjuicios materiales demandados, no es viable la prosperidad de las pretensiones erigidas por los conceptos señalados; de lo contrario, una remota condena en contra de mi prohijada, generaría un rubro injustificado a favor de los demandantes, lo que se traduciría en un enriquecimiento sin causa.

PERJUICIOS INMATERIALES:

Al respecto, es menester recordar que los parámetros fijados por el Consejo de Estado en la Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2014, estableció los estándares correspondientes al valor de la reparación del daño en caso de lesiones, por medio de una juiciosa unificación de jurisprudencia, la cual es vinculante para todos los jueces de esta jurisdicción, resumida en la siguiente tabla:



REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL EN CASO DE LESIONES					
	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4	NIVEL 5
GRAVEDAD DE LA LESIÓN	Victima directa y relaciones afectivas conyugales y paterno-filiales	Relación afectiva del 2° de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos)	Relación afectiva del 3° de consanguinidad o civil	Relación afectiva del 4° de consanguinidad o civil.	Relaciones afectivas no familiares - terceros damnificados
	S.M.L.M.V.	S.M.L.M.V.	S.M.L.M.V.	S.M.L.M.V.	S.M.L.M.V.
Igual o superior al 50%	100	50	35	25	15
Igual o superior al 40% e inferior al 50%	80	40	28	20	12
Igual o superior al 30% e inferior al 40%	60	30	21	15	9
Igual o superior al 20% e inferior al 30%	40	20	14	10	6
Igual o superior al 10% e inferior al 20%	20	10	7	5	3
Igual o superior al 1% e inferior al 10%	10	5	3,5	2,5	1,5

De conformidad con lo anterior, el operador judicial debe basar cualquier tipo de reconocimiento de perjuicios en la gravedad del daño que se le hubiere causado a la víctima. En ese sentido, el Consejo de Estado ha advertido que el reconocimiento de perjuicios morales, en principio, se encuentra condicionado al igual que demás perjuicios a la prueba de su causación, la cual debe obrar dentro del proceso. Por esta razón, el Juez Contencioso al momento de decidir se encuentra en la obligación de hacer explícitos los razonamientos que lo llevan a tomar dicha decisión, en el entendido que la ausencia de tales argumentaciones conlleva una violación al derecho fundamental del debido proceso.

En cuanto a los perjuicios denominados “Daño a la vida de relación”, “pérdida de oportunidad” y “daño a la salud” no fueron aportadas pruebas que permitan reconocer dichos perjuicios.

Por lo anterior, se solicita de manera respetuosa al Despacho se sirva negar las pretensiones de la demanda, como quiera que los rubros solicitados no se encuentran jurídicamente estructurados y su reconocimiento traduciría en un enriquecimiento sin justa causa.

V. RAZONES DE LA DEFENSA:

En el presente caso, la parte actora alega una supuesta responsabilidad del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicio de Santiago de Cali, por los perjuicios de índole material e inmaterial ocasionados como consecuencia del accidente





ocurrido el día 12 de abril de 2023, a la altura de la Calle 16 entre carreras 79 y 80 en sentido Sur – Norte, donde transitaba la accionante Elena Patricia Acevedo Rivas, en su motocicleta de placas HSR20D, aduciendo que la causa eficiente del daño se debió a la existencia de hueco en la vía pública.

El artículo 90 de la Constitución Política, consagra la responsabilidad extracontractual del Estado, así:

"El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas".

Corresponde entonces a la parte demandante, demostrar en este punto, que existió la falla en el servicio, así como que la misma haya sido la causa que dio lugar al daño antijurídico generado.

En relación con el tema, el Consejo de Estado en Sentencia de octubre de 1995, expediente 9535, señaló:

"Por lo anterior, los hechos objeto del proceso deben manejarse dentro del régimen de la falla ordinaria o probada, en el cual al demandante le incumbe la demostración de todos los elementos que configuran la responsabilidad estatal (. . .)

Y, toda vez que se imputa una omisión administrativa, la parte actora, debe, además de probar la existencia del perjuicio y su relación de causalidad con la omisión de la cual él se deriva, acredita la existencia de la obligación legal o reglamentaria que imponía a la administración la realización de la conducta con la cual los perjuicios no se habrían producido. O, lo que es lo mismo, debía acreditar la existencia de la falla del servicio consistente en el cumplimiento de un deber y demostrar que dicha falla fue la causante del daño".

Será entonces lo propio, que la parte demandante demuestre inicialmente que en efecto existió la falla en el servicio, así como el nexo causal entre ésta y el daño.

En cuanto a la falla en el servicio, la demandante parte de la **premisa que existe una omisión** por parte de la Entidad, debido a la existencia de un hueco en la vía; como segunda premisa infiere que es el Ente Territorial quien tenía la obligación de realizar el mantenimiento, señalización y reparación; para concluir que se debe declarar administrativamente responsable del daño.

En concordancia con lo anterior y en revisión a las pruebas obrantes en el expediente, no logran demostrar por si solas los posibles daños sufridos a la demandante ELENA PATRICIA ACEVEDO RIVAS, y mucho menos acreditar dichos perjuicios materiales e inmateriales alegados, así como tampoco responsabilidad alguna al DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI; como se anotó en párrafos anteriores, el daño por sí solo no basta para que se configure la responsabilidad del Estado, toda vez que deben acreditarse dos requisitos indispensables como lo son la falencia de la Administración y el nexo de causalidad entre ésta y el daño, los cuales no fueron acreditados en el presente asunto, pues si bien la parte demandante pretende cumplir con la carga probatoria establecida en los artículos 167 del C.G.P., y 103 de la Ley 1437 de 2011, aportando Informe Policial de Accidente de Tránsito – A001526299, historia clínica, fotografía, el SOAT, entre otro, estos no bastan para construir el juicio de imputación, ni constituyen la prueba idónea para determinar las circunstancias que rodearon el accidente alegado, ni mucho menos el daño alegado.



Para acreditar el hecho, la apoderada demandante, allegó Informe Policial de Accidentes de Tránsito No. A001526299 del 13 de abril de 2023, en el cual se consigna como hipótesis del accidente el número 306, así como característica de la vía en el numeral 7 – estado **“Con Huecos”**. Se insiste, que dicho Informe Policial de Accidente de Tránsito elaborado por el agente Diego Fernando Loaiza, por sí solo no permite determinar que el hueco en la vía haya sido la causa eficiente del daño, si bien es cierto en el mismo se demuestra la ocurrencia del accidente, pues señala la dirección, las características del lugar, la presencia del hueco en la vía, estas no ofrecen ninguna certeza acerca de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de como ocurrió el accidente, para de esta forma poder determinar o no que dicha irregularidad en la vía (hueco) fue determinante en la producción del daño.

Al igual respecto a la supuesta hipótesis -306- allí relacionada la misma no ofrece certeza toda vez que como se indicó el informe policial de accidente de tránsito allegado fue levantado casi 22 horas después de la ocurrencia del accidente, lo que permite concluir que el agente de tránsito que hizo el levantamiento no le consta lo realmente ocurrido, ya que, el citado informe se realizó con base en supuestos testigos.

En ese sentido, es necesario mencionar, que si bien es cierto, que algunas vías de la ciudad presentan deterioros en su conformación, también lo es que el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, ha procurado de manera incansable y permanentemente atender dicha situación, en procura de salvaguardar la vida de la ciudadanía y minimizar los accidentes, pero no por ello puede predicarse que todo accidente en la vía sea producto de ese estado, y que sea suficiente tal afirmación para imputar responsabilidad a la Entidad Territorial y ello es lo que hace la parte actora, pues se limita a señalar una responsabilidad al Municipio de Santiago de Cali hoy Distrito Especial; y que como consecuencia se le condene a pagar una suma de dinero por perjuicios materiales e inmateriales, sin que se prueben las circunstancias de modo, tiempo y lugar que rodearon al mismo, pues de los anexos de la demanda lo que resulta es que la señora ELENA PATRICIA ACEVEDO, estaba desempeñando una **actividad peligrosa** y como tal, debe demostrar no sólo diligencia y cuidado sino que efectivamente una causa extraña y externa a ella fue la causa eficiente del daño.

Ahora bien, señala la parte actora que la conducta de la Administración se enmarca "en una evidente falla del servicio", pero no puede imputar el daño sufrido por la señora ELENA PATRICIA ACEVEDO, como una omisión de la Administración Distrital.

Sin embargo, observamos que la demandante, omite en la demanda la información relativa a las circunstancias fácticas en que ocurrió dicho accidente, en qué forma se desplazaba la conductora, por cual carril conducía en el momento del accidente, qué maniobra adelantaba, de dónde provenía y hacía donde se dirigía, a qué velocidad se desplazaba, cuál era su estado anímico, momentos antes de la ocurrencia de los hechos.

Así mismo, se puede entrever que el informe policial aportado fue realizado aproximadamente 22 horas después del presunto accidente, relacionando unos supuestos testigos.

Por lo expuesto señor Juez, al no acreditarse las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, solicito se nieguen las pretensiones de la demanda, pues no es posible imputar responsabilidad alguna al Distrito Especial de Santiago de Cali, cuando no existe prueba en el plenario que acredite la falla ni mucho menos el nexo causal entre la falla y el daño alegado, más cuando aún existe duda sobre la forma como la demandante perdió el equilibrio de su motocicleta y se lesionó.

VI. FRENTE AL DAÑO ANTIJURÍDICO:

Empecemos por establecer la noción de "daño", el doctor **JOSÉ N. DUQUE GÓMEZ** en su obra **"EL DAÑO, compilación y extractos"** lo define de la siguiente manera:

"La certeza hace alusión a la verdad de su existencia, como concepto opuesto a todo lo que es hipotético, posible o eventual. Para que el daño sea indemnizable es requisito indispensable que sea cierto, verdadero e incuestionable." (..)

"...Lo contrario a la certeza es la incertidumbre que se presenta cuando no hay seguridad sobre la real existencia del perjuicio que se invoca; se dice que el daño es incierto cuando los elementos de juicio de que dispone son insuficientes para sustentar su causación. En esta situación de incertidumbre el daño no es reparable y así lo tiene plenamente establecido nuestra jurisprudencia". (..)

Este criterio, encuentra consonancia con lo establecido en el artículo 167 del Código General del Proceso, norma general del Régimen Probatorio, según el cual, **"Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen."**

Como bien se puede determinar en este caso en estudio, los perjuicios en relación con los cuales se pretende obtener indemnización, son los relacionados con la afección en la integridad física de la demandante señora ELENA PATRICIA ACEVEDO RIVAS, de los cuales se desprenden todas las pretensiones de la demanda.

Como tesis inicial se sostendrá, que con lo aportado en el libelo de demanda, **no existe prueba que permita** demostrar que la demandante sufrió las lesiones físicas con motivo de la pérdida del equilibrio de su motocicleta al pasar por un presunto hueco en la vía cayendo contra el piso, y mucho menos que existe responsabilidad del Ente Territorial que represento, como se verá a continuación:

VII. DE LAS PRUEBAS APORTADAS Y SOLICITADAS:

En cuanto a las lesiones sufridas por la señora ELENA PATRICIA ACEVEDO RIVAS, se logra advertir que no se allegó prueba alguna que cumpla con las condiciones necesarias de pertinencia, conducencia y eficacia, para ostentar poder de convicción en relación con el hecho que se pretende probar.

Estas condiciones pueden ser definidas así:

"La pertinencia o relevancia consiste en que haya alguna relación entre el medio probatorio y el enunciado fáctico que se pretende someter a prueba, de manera que pueda influir en la decisión correspondiente... (...)

"En virtud de la conducencia, respecto de un caso determinado, el medio de prueba debe encontrarse explícitamente autorizado, o no estar excluido expresa o tácitamente... La conducencia de la prueba no es cuestión de hecho, sino de Derecho, al encontrarse contemplada en la ley o no estar dispuesta restricción para su uso procesal; ya que legalmente puede recibirse o practicarse. La conducencia se predica de la prueba y la pertinencia de los hechos material del proceso; así, una prueba puede ser pertinente pero el medio propuesto puede no ser idóneo. Un documento privado o un testimonio no son legalmente idóneos para demostrar la venta de un bien inmueble, pues la ley exige escritura pública para su celebración (Devis 1981: 340; Parra 2007: 153). (...) "Prueba eficaz es la que resulta efectivamente útil para llevar a la convicción del juez, derivada de criterios de valoración racionales.. En suma, la eficacia de la prueba se establece efectuada su valoración o apreciación."



DE LA HISTORIA CLÍNICA: Como prueba la parte actora allega copia de la historia clínica cuyo contenido describe la atención médica brindada por la **"UNIDAD MEDICA QUIRURGICA SANTA CLARA,** a la señora **ELENA PATRICIA ACEVEDO RIVAS,** con sus respectivas valoraciones, procedimientos realizados e incapacidades otorgadas; del análisis juicioso de tal probanza, se tiene que si bien se indica dentro de la causa de consulta "Accidente de tránsito", dicha prueba no es la idónea en determinar dicha situación, para eso se cuenta con el informe policial, así como allí no se logra evidencia circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedió el presunto accidente.

No sobra señalar que dicho documento debe cumplir los requisitos específicos que debe contener un documento para ostentar de "autenticidad", tal como lo establece el artículo 244 del Código General del Proceso.

"ARTÍCULO 244 C.G.P: DOCUMENTO AUTÉNTICO: Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el documento. Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso. También se presumirán auténticos los memoriales presentados para que formen parte del expediente, incluidas las demandas, sus contestaciones, los que impliquen disposición del derecho en litigio y los poderes en caso de sustitución. Así mismo se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos para ser título ejecutivo. La parte que aporte al proceso un documento, en original o en copia, reconoce con ello su autenticidad y no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad. Los documentos en forma de mensaje de datos se presumen auténticos. Lo dispuesto en este artículo se aplica en todos los procesos y en todas las jurisdicciones. En concordancia con los artículos 252 y siguientes del C.P.C"

La ausencia de estos requisitos impone **DESESTIMAR ESTA PRUEBA,** así lo hizo el Consejo de Estado en la sentencia precitada al indicar que:

"Así mismo, en cuanto al documento contentivo en dos folios (348, 349, cdno. 1) del extracto de la historia clínica de urgencias emitida por Hospital Tomás Uribe Uribe de Tuluá - Valle, en relación con la atención médica dispensada al señor Delgado Jiménez el 4 de febrero de 1996) se advierte que este no puede ser valorado en esta instancia, por cuanto no fue aportado al proceso en los términos previstos el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil (9), en esa medida no se tiene certeza sobre su autenticidad.

Al igual, de las demás pruebas aportadas con el libelo demandatorio – SOAT (la cual resulta poco legible) y el Formulario Único de reclamación de los prestadores de servicios de salud por servicios prestados a víctimas de eventos catastróficos y accidentes de tránsito- no logra probar lo acontecido en el presunto accidente.

Por último, en cuanto a la fotografía aportada se solicita no sea valorada como medio probatorio, ya que no existe certeza de quien la tomó, así como las condiciones de tiempo y lugar en que fue tomada.

En cuanto a las pruebas solicitadas por la parte demandante, esta apoderada se pronuncia sobre las siguientes:

Sobre el interrogatorio de parte del demandado, me permito solicitar que la misma no sea decretada, toda vez que de conformidad con lo señalado en el artículo 217 del C.P.A.C.A. no valdrá la confesión de los representantes de las entidades públicas.

En cuanto a la solicitud de dictámenes periciales solicitados en la demanda, tanto el de la reconstrucción de accidente de tránsito como el dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral, solicito que las mismas sean negadas, ya que no fueron aportadas

dentro de las oportunidades probatorias estipulado en el artículo 212 del CPACA, norma aplicable para este procedimiento contencioso administrativo.

DE LAS ACTIVIDADES PELIGROSAS

La actividad de conducir una motocicleta, es una de aquellas que tradicionalmente se ha catalogado como una actividad PELIGROSA DE ALTO RIESGO, de manera que esa misma actividad es la generadora del daño, por lo tanto cada ciudadano al momento de desplegarla es consciente que debe cumplir con un ordenamiento regulatorio vial. La doctrina ha estudiado las causas de accidentes de tránsito concluyendo que además de las características del entorno y de la vía, se debe observar otras de índole humano y funcionalidad del mismo vehículo (estado Técnico -mecánico). Es claro que la utilización de este tipo de automotores (motocicletas), demanda, además de una pericia de la persona que la maneja para maniobrarla en todo terreno, teniendo en cuenta la gran inestabilidad que este vehículo ofrece, para ello se debería tener cuidado y visualización del entorno, lo cual no se compadece con la inseguridad que brindan dichos vehículos para quienes lo utilizan, pues no poseen ningún sistema de seguridad de la persona, distinta a la propia pericia y capacidad de maniobrar de quien conduce dicho vehículo.

"Quien conduce debe prever aun aquellos eventos derivados de la imprudencia o inobservancia de los demás, ello tiene su límite en la razonable probabilidad del peligro y por ello no puede pretenderse del conductor la previsión de la remota posibilidad; a él se le exige es una actitud síquica en la que prevea aquellos Sucesos que se presentan con notorio grado de probabilidad, es decir, en lo que la ocurrencia del daño a un interés jurídico pueda ser evitada con su contribución activa más allá de este límite su conducta se desplaza a lo fortuito o a la fuerza mayor" (Expediente No. 9722, Diciembre 9 de 1996, Consejero Ponente, Juan de Dios Montes Hernández, subrayado y negrillas propio).

En el caso traído a examen, NO ESTARÍA DEMOSTRADO que la señora ELENA PATRICIA ACEVEDO RIVAS, actuaba con el cuidado y la pericia requerida para conducir una motocicleta, y aplicando la normatividad de tránsito, infiriéndose que no cumplir lo anteriormente anotado, se estaría frente de situaciones ajenas a las actividades de la Administración Municipal; por lo tanto es improcedente declarar responsabilidad del Ente Territorial que represento.

Permítame señor Juez traer a colación, el pronunciamiento de la Sección Tercera del Honorable Consejo de Estado, Consejera Ponente: MYRIAM GUERRERO DE ESCOBAR, Radicación Numero: 85001-23-31-000-1995-00099-01 (16192), Bogotá D.C., veintidós (22) de Abril de dos mil nueve (2009), en los siguientes términos:

."RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR OMISIÓN - Requisitos / RESPONSABILIDAD POR OMISIÓN - Contenido y alcance."

Frente a supuestos en los cuales se analiza si procede declarar la responsabilidad del Estado como consecuencia de la producción de daños en cuya ocurrencia ha sido determinante la omisión, por parte de una autoridad pública, en el cumplimiento de las funciones que el ordenamiento jurídico le ha atribuido, la Sala ha señalado que es necesario efectuar el contraste entre el contenido obligacional que, en abstracto, las normas pertinentes fijan para el órgano administrativo implicado, de un lado, y el grado de cumplimiento u observancia del mismo por parte de la autoridad demandada en el caso concreto, de otro.

En este sentido, se ha sostenido que la falla de la administración, para que pueda considerarse entonces verdaderamente como causa del perjuicio y comprometa su responsabilidad, no puede ser entonces cualquier tipo de falta. Ella debe ser de tal entidad que, teniendo en cuenta las concretas circunstancias en que debía prestarse el servicio, la conducta de la administración pueda



considerarse Como anormalmente deficiente. Nota de Relatoría: Ver sentencia del 8 de marzo de 2007, exp. 27434.

ACCIDENTE DE TRANSITO - Prueba del hecho. Inexistencia -1 CARGA DE LA PRUEBA - Obligación de las partes / CARGA DE LA PRUEBA - Corresponde a quien alega un hecho 1 MANTENIMIENTO VIAL - Responsabilidad por omisión / FALLA DEL SERVICIO POR SEÑALIZACIÓN - Inexistencia. Carga de la prueba

Se encuentra acreditado que el señor José Ariado Naranjo sufrió lesiones como consecuencia de un accidente de tránsito que le produjeron una incapacidad definitiva de 25 días sin secuelas médico legales, sin embargo no existe prueba alguna en el proceso que indique cómo ocurrieron realmente los hechos relacionados con el accidente aludido. En ese contexto, no es posible determinar cuál habría sido la verdadera causa del accidente en el que resultaron involucrados un vehículo particular y una motocicleta, ni siquiera se conocen las características de cada uno de los vehículos implicados en el asunto. Y si bien resulta ser cierto el hecho de que una semana antes del accidente se produjo el estallido de un carro bomba, acción que habría dejado un hueco sobre la carretera, siendo esta la causa de la colisión de los vehículos, por la falta de señalización, no es posible afirmar que ello hubiere sido así, como lo afirman los actores, pues según la Policía Nacional el lugar sí se encontraba señalizado, tal como se desprende del oficio No 02964 en el que se advierte que miembros del C. TI de la Policía Nacional practicaron el levantamiento del cadáver del conductor de la motocicleta, y que "si existía señalización de la presencia del cráter y de material para la 'reparación de la vía'. Se requería, además, acreditar cuál fue la conducta omisiva en la que habrían incurrido las entidades demandadas, y si ésta fue la causante del accidente que involucró un vehículo particular y una motocicleta, pero además era necesario acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar del accidente. Como lo ha precisado la Sala en varias oportunidades, la carga de la prueba compete a la parte que alega un hecho o a quien lo excepciona o lo controvierte, de acuerdo con el artículo 177 del C.P.C., y si bien la ley faculta al juez para decretar pruebas de oficio, tal posibilidad no puede convertirse en un instrumento que supla las obligaciones, que corresponden a las partes en el proceso..."

Las anteriores consideraciones dan cuenta de la INEXISTENCIA DEL NEXO CAUSAL, y a su vez se traduce en una causal eximente de responsabilidad o causal excluyente de imputación, por existir HECHO EXCLUSIVO DE LA VÍCTIMA.

Vale traer a cita a título reiterativo las precisiones de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en Sentencia 1998-05970 de junio 9 de 2010, señalándose lo siguiente:

"2.2. El hecho exclusivo de la víctima como eximente de responsabilidad o causal excluyente de imputación (2). "Las tradicionalmente denominadas causales eximentes de responsabilidad fuerza mayor, caso fortuito, hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la víctima constituyen diversos eventos que dan lugar a que devenga jurídicamente imposible imputar, desde el punto de vista jurídico, la responsabilidad por los daños cuya causación da lugar a la iniciación del litigio, a la persona o entidad que obra como demandada dentro del mismo. En relación con todas ellas, tres son los elementos cuya concurrencia tradicionalmente se ha señalado como necesaria para que sea procedente admitir su configuración: (Osu irresistible; O su imprevisibilidad Y (iii) su exterioridad respecto del demandado, extremos en relación con los cuales la jurisprudencia de esta sección ha sostenido lo siguiente: "En cuanto tiene que ver con (i) la irresistible como elemento de la causa extraña, la misma consiste en la imposibilidad del obligado a determinado comportamiento o actividad para desplegarlo o para llevarla a cabo; en otros términos, el daño debe resultar inevitable para que pueda sostenerse la ocurrencia de una causa extraña, teniendo en cuenta que lo irresistible o inevitable deben ser los efectos del fenómeno y no el fenómeno mismo -pues el demandado podría, en determinadas circunstancias, llegar a evitar o impedir los efectos dañinos del fenómeno, aunque este sea, en sí mismo, irresistible, caso de un terremoto o de un huracán (C.C., art. 64) algunos de cuyos efectos nocivos, en ciertos supuestos o bajo determinadas condiciones, podrían ser evitados -

"Por lo demás, si bien la mera dificultad no puede constituirse en verdadera imposibilidad, ello tampoco debe conducir al entendimiento de acuerdo con el cual la imposibilidad siempre debe revestir un carácter sobrehumano; basta con que la misma, de acuerdo con la valoración que de imposibilidad



de ejecución debe interpretarse de una manera humana y teniendo en cuenta todas las circunstancias: basta que la imposibilidad sea normalmente insuperable teniendo en cuenta las condiciones de la vida" (. "En lo referente a (11) la imprevisibilidad, suele entenderse por tal aquella circunstancia respecto de la cual "no sea posible contemplar por anticipado su ocurrencia", toda vez que "[P]rever, en el lenguaje usual, significa ver con anticipación", entendimiento de acuerdo con el cual el agente causante del daño solo podría invocar la configuración de la Causa extraña cuando el hecho alegado no resulte imaginable antes de su ocurrencia, cuestión de suyo improbable si se tiene en cuenta que el demandado podría prefigurarse, aunque fuese de manera completamente eventual, la gran mayoría de eventos catalogables como causa extraña antes de su ocurrencia, más allá de que se sostenga que la imposibilidad de imaginar el hecho alude a que el mismo jamás hubiera podido pasar por la mente del demandado o a que este deba prever la ocurrencia de las circunstancias que resulten de más o menos probable configuración o a que se entienda que lo imprevisible está relacionado con el conocimiento previo de un hecho de acaecimiento cierto.

"Sin embargo, el carácter imprevisible de la causa extraña también puede ser entendido como la condición de "imprevisto" de la misma, esto es, de acontecimiento súbito o repentino, tal y como lo expresan tanto el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, como el artículo 64 del Código Civil 11 y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con la cual "Imprevisible será cuando se trate de un acontecimiento súbito, sorpresivo, excepcional, de rara ocurrencia 412. La recién referida acepción del vocablo "imprevisible" evita la consecuencia a la cual conduce el entendimiento del mismo en el sentido de que se trata de aquello que no es imaginable con anticipación a su ocurrencia, toda vez que esta última comprensión conllevaría a que la causa extraña en realidad nunca operase, si se tiene en cuenta que prácticamente todos los sucesos que ocurren a diario ya han sido imaginados por el hombre.

"No está de más señalar, en cualquier caso, que la catalogación de un determinado fenómeno como imprevisible excluye, de suyo, la posibilidad de que en el supuesto concreto concurra la culpa del demandado, pues si este se encontraba en la obligación de prever la ocurrencia del acontecimiento al cual se pretende atribuir eficacia liberatoria de responsabilidad y además disponía de la posibilidad real y razonable de hacerlo, entonces los efectos dañinos del fenómeno correspondiente resultarán atribuibles a su comportamiento culposo y no al advenimiento del anotado suceso. Culpa e imprevisibilidad, por tanto, en un mismo supuesto fáctico, se excluyen tajantemente. En la dirección señalada marcha, por lo demás, la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la cual ha matizado la rigurosidad de las exigencias que, en punto a lo "inimaginable" de la causa extraña, había formulado en otras ocasiones:

"Así pues, resulta mucho más razonable entender por imprevisible aquello que, pese a que pueda haber sido imaginado con anticipación, resulta súbito o repentino o aquello que no obstante la diligencia y cuidado que se tuvo para evitarlo, de todas maneras acaeció, con independencia de que hubiese sido mentalmente figurado, o no, previamente a su ocurrencia.

En la dirección señalada marcha, por lo demás, la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la cual ha matizado la rigurosidad de las exigencias que, en punto a lo "inimaginable" de la causa extraña, había formulado en otras ocasiones:

(..)

"Y, por otra parte, en lo relacionado con (110 la exterioridad de la causa extraña, si bien se ha señalado que dicho rasgo característico se contrae a determinar que aquella no puede ser imputable a la culpa del agente que causa el daño o que el evento correspondiente ha de ser externo o exterior a su actividad, quizás sea lo más acedado sostener que la referida exterioridad se concreta en que el acontecimiento y circunstancia que el demandado invoca como causa extraña debe resultar ajeno jurídicamente, pues más allá de sostener que la causa extraña no debe poder imputarse a la culpa del agente resulta, hasta cierto punto, tautológico en la medida en que si hay culpa del citado agente mal podría predicarse la configuración al menos con efecto liberatorio pleno de causal de exoneración alguna, tampoco puede perderse de vista que existen supuestos en los cuales, a pesar de no existir culpa por parte del agente o del ente estatal demandado, tal consideración no es suficiente para eximirle de responsabilidad, como ocurre en los casos en los cuales el régimen de responsabilidad aplicable es de naturaleza objetiva, razón por la cual la exterioridad que se exige de la causa del daño para que pueda ser considerada extraña a la entidad demandada es una exterioridad jurídica, en el sentido de que ha de tratarse de un suceso o acaecimiento por el cual no tenga el deber jurídico de responder la accionada".



"Por otra parte, a efectos de que opere el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, es necesario aclarar, en cada caso concreto, si el proceder activo u omisivo de aquella tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del daño. En ese orden de ideas, resulta dable concluir que para que el hecho de la víctima tenga plenos efectos liberadores de la responsabilidad estatal, es necesario que la conducta desplegada por la víctima sea tanto causa del daño, como la raíz determinante del mismo, es decir, que se trate de la causa adecuada, pues en el evento de resultar catalogable como una concausa en la producción del daño no eximirá al demandado de su responsabilidad y, por ende, del deber de. Indemnizar, aunque, eso sí, habrá lugar a rebajar su reparación en proporción a la participación de la víctima"

Para el Ente Territorial que represento, resulta evidente, que fue irresistible e imprevisible este hecho extraño, pues imposible es hacer frente al incumplimiento de las normas de tránsito, que han sido dotadas de sanciones para tornar difícil su inobservancia, a pesar de lo cual, la conductora en este caso, decidió bajo su responsabilidad, asumir el grave riesgo que le imponía apartarse de las normas en una delicada actividad como es la conducción de una motocicleta.

Lo anterior, cobra mayor fuerza al realizar un análisis exhaustivo al Informe Policial de Accidente de Tránsito No. A001526299 del 13 de abril de 2023, donde se pudo observar el NO registro de la velocidad promedio con la que la señora ELENA PATRICIA ACEVEDO RIVAS, conducía la motocicleta al momento del accidente, estado de embriaguez y/o sustancias psicoactivas, uso reglamentario del chaleco y casco; así como tampoco registro de la revisión técnico-mecánica del vehículo automotor tipo motocicleta. Pues conforme a las observaciones relacionadas en el citado informe policial, registra que "(...) el vehículo fue corrido por auxiliar al lesionado por parte de paramédicos el siniestro ocurre el día 12 de abril y se conoce el día 13 de abril en la clínica Santa Clara (...)"; así como en el acápite de testigos se relacionan dos señores, es decir que el Informe en mención, fue elaborado por el agente de tránsito con base en la versión de unos testigos, dado que dicho agente acude al sitio de la ocurrencia de los hechos casi veintidós horas después, pues se observa como fecha y hora de levantamiento el 12 de abril de 2023 a las 20:20 y de la ocurrencia del siniestro 13 de abril de 2023 a las 18:00.

Sobre el particular, es pertinente resaltar que la doctrina se ha ocupado del estudio de las causas de los accidentes de tránsito, encontrando que se debe prestar atención a las causas atribuibles al factor humano, (el conductor, aspectos físicos, estado anímico, etc.), así como también el entorno, esto es las características de la vía, porque carril se desplazaba el conductor, estado técnico-mecánico del vehículo, y finalmente, el **RELEVANTE HECHO QUE EL INFORME DE ACCIDENTE DE TRANSITO, FUE ELABORADO POR EL AGENTE DE TRANSITO CON BASE EN VERSIONES.**

En este sentido, pretende la parte convocante, con la prueba en comento, acreditar el estado de la vía, resultando huérfano dicho medio probatorio, en el entendido que para la demostración de este hecho, no solo basta allegar el IPAT que levanta el agente de tránsito, junto con bosquejo topográfico, que en últimas es un informe descriptivo, si no que se requiere de un conocimiento técnico, conforme lo establece el artículo 226 del CGP, que a su tenor dispone:

"La prueba pericial es procedente para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos."

La experticia técnica, podría determinar la medida de la vía, las distancias mínimas o máximas, la trayectoria del vehículo, una descripción general y particular del lugar, donde

indique como ocurrieron los hechos, la reglamentación aplicable para éste tipo de vías, la prelación de la vía, etc. Condiciones que no aparecen en su totalidad con el material (IPAT) aportado como prueba con el libelo demandatorio.

En relación a lo anterior, la doctrina ha indicado, mediante Sentencia T-475/18:

INFORME POLICIAL DE ACCIDENTE DE TRANSITO - No es un informe pericial sino un informe descriptivo.

*"El marco normativo y el manual permiten establecer que **el informe policial de accidente de tránsito no es un informe pericial, sino un informe descriptivo**. Este informe, a su vez, tiene unos criterios de evaluación propios, que no son los establecidos por el CPG o el CPACA para este tipo de prueba. Esta evaluación implica, entre otras, que la ratificación del informe debe hacerse según el protocolo establecido en el manual, es decir, que las preguntas planteadas en el proceso deben estar orientadas a establecer si el agente se ciñó al protocolo. Asimismo, el hecho de que el manual del diligenciamiento entienda que **el informe policial de accidente de tránsito puede hacer parte de un proceso, implica que aquel debe ser considerado como un material probatorio, el cual se revisa en conjunto con otras pruebas**." (Negrilla y subraya fuera del texto).*

Como lo ha sostenido la doctrina al tratar la actividad peligrosa del manejo de automotores, ha admitido que es obligatorio ejercer esta actividad bajo el esquema de "manejo a la defensiva", ello implica un despliegue especial de la atención y percepción por parte de los sujetos que la asumen.

Al respecto, el máximo órgano de cierre de lo Contencioso Administrativo ha dicho:

*(...) "Debe recordarse que los usuarios de las vías, bien como peatones o como conductores, **están en la obligación de extremar al máximo las medidas de seguridad**, independientemente de que una norma les imponga dicha exigencia, **pues la conducción de vehículos automotores es considerada una actividad peligrosa**, lo cual implica asumir riesgos cuando se hace partícipe de ella, pero dicha obligación tiene la connotación de ser mucho más exigente para los motociclistas, por su estado total de indefensión, a tal punto que en los eventos en los que estos resultan involucrados en un accidente, siempre llevan la peor parte".¹ (Negrillas y subraya fuera del texto).*

Ahora bien, sobre la conducta y previsión que le cabe asumir a los conductores de vehículos el Consejo de Estado se pronunció en los siguientes términos:

*"Quien conduce debe prever aun aquellos eventos derivados de la imprudencia o inobservancia de los demás, ello tiene su límite en la razonable probabilidad del peligro y por ello no puede pretenderse del conductor la previsión de la remota posibilidad; a él se le exige **es una actitud síquica en la que prevea aquellos sucesos que se presentan con notorio grado de probabilidad, es decir, en lo que la ocurrencia del daño a un interés jurídico pueda ser evitada con su contribución activa**; mas allá de este límite su conducta se desplaza a lo fortuito o a la fuerza mayor..."² (Resaltos y subraya propios).*

En este contexto, carece de sustento lo afirmado por la parte demandante en cuanto señala que el hecho implica una falla del servicio por parte de la Administración, lo cual le corresponde probar.

Así pues, se reitera sobre la gran responsabilidad de la víctima en los hechos subjudice, ya que de haber conducido con precaución y con total y absoluta atención sobre la vía y sus

¹ CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA 17.185 (R-2237) Consejera Ponente: MYRIAM GUERRERO DE ESCOBAR Bogotá, D.C., diecinueve (19) de agosto d dos mil nueve 2009.

² Expediente No. 9722, Diciembre 9 de 1996, Consejero Ponente, Juan de Dios Montes Hernández.



actores, a la velocidad permitida, y carril debido, esto le hubiese permitido observar los posibles obstáculos de la vía para superarlo sin dificultad, es decir la conductora del vehículo con su actuar infringió disposiciones del Código Nacional de Tránsito.

Le correspondía entonces a la Sra. ACEVEDO RIVAS, conducir la motocicleta atendiendo las disposiciones del Código Nacional de Tránsito, quien reza en su artículo 55:

- Artículo 55. Comportamiento del conductor, pasajero o peatón. Toda persona que tome parte en el tránsito como conductor, pasajero o peatón, debe comportarse en forma que no obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a los demás y debe conocer y cumplir las normas y señales de tránsito que le sean aplicables, así como obedecer las indicaciones que le den las autoridades de tránsito.

Como bien puede observarse, no existe ningún elemento probatorio y/o indiciario para determinar que los hechos ocurrieron por causas atribuibles al Distrito Especial de Santiago de Cali, por lo tanto no puede estimarse como un evento de exclusiva responsabilidad del Ente Territorial que represento, así las cosas, la decisión final debe resultar adversa a las pretensiones relacionada con aquéllas en razón de mi prohijada.

Bajo esta panorámica Honorable señora Juez, el daño no ostenta la naturaleza de cierto, actual y determinado, motivo adicional para predicar el cumplimiento de los preceptos normativos contenidos en el artículo 90 de la Constitución Política, necesarios para sustentar el acaecimiento del mismo.

Por tanto una vez establecida la existencia del daño antijurídico, abordado por la Justicia Contenciosa Administrativa, el análisis de la imputación con el fin de determinar si en el caso concreto dicho daño le puede ser atribuido a la administración pública y, por lo tanto, si es deber jurídico de ésta resarcir los perjuicios que del mismo se derivan y, en consecuencia, si se debe indemnizar.

De conformidad con el acervo probatorio allegado al plenario, es claro que, en el caso concreto, no existe forma de atribuir fáctica, ni jurídicamente el daño endilgado a la entidad pública demandada **DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI**, toda vez que no se encuentra suficientemente demostrado que el origen de las lesiones de la señora ELENA PATRICIA ACEVEDO RIVAS, hubiese sido ocasionada por una actuación de la administración como pretende endilgar su apoderado, y que hubiese derivado en la producción de los daños que se acaban de relacionar, es decir, no son imputables a la actuación administrativa y por tanto no pueden tener la consideración de lesiones antijurídicas.

Así las cosas, no hay prueba alguna dentro del expediente que permita establecer que la ocurrencia del hecho dañino resulte jurídicamente imputable a la entidad pública en cuestión como lo entiende la demandante y mucho menos que el incumplimiento de tal contenido obligacional a cargo de la Administración pueda tenerse como una imputación adecuada del daño, en la medida en que no concurrió a determinarlo y, por ende, no se puede comprometer la responsabilidad del Distrito Especial de Santiago de Cali pues, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2344 del Código Civil, sólo quienes concurren a la producción del daño deben responder solidariamente del mismo, cosa que no acontece en el presente caso.

EL TÍTULO DE IMPUTACIÓN

Cuando se debate la ocurrencia de un daño proveniente del ejercicio de una actividad peligrosa, como lo es la manipulación de armas de dotación oficial, el título de imputación bajo el cual se resuelve la controversia es el objetivo de riesgo excepcional; sin embargo,



cuando se advierte que el daño no se produjo accidentalmente sino, por un mal funcionamiento de la Administración, ello se debe poner de presente y el título de imputación bajo el cual se definirá el litigio, es el de falla del servicio. En aras del cumplimiento del deber de diagnóstico y pedagogía que tiene el juez al definir la responsabilidad del Estado y, a fin de que éste pueda repetir contra el agente que dolosa o culposamente produjo el daño, en caso de ser condenado a la correspondiente reparación.

En el régimen de imputación subjetivo de responsabilidad denominado falla del servicio probada, la responsabilidad surge a partir de la comprobación de la existencia de tres elementos necesarios: i) el daño sufrido por el interesado; ii) la falla del servicio propiamente dicha, consistente en el mal funcionamiento del servicio porque éste no funcionó cuando debió hacerlo o, lo hizo tardía o 'equivocadamente y; iii) una relación de causalidad entre estos dos elementos, es decir, la comprobación de que el daño se produjo como consecuencia de la falla del servicio.

Una vez presentes tales elementos, la entidad pública demandada solo podrá exonerarse de una declaratoria de responsabilidad si prueba que su actuación fue oportuna, prudente, diligente y con pericia, es decir, que no hubo falla del servicio o; si logra romper el nexo causal, mediante la acreditación de una causa extraña: fuerza mayor, hecho exclusivo y determinante de la víctima o, hecho también exclusivo y determinante de un tercero.

CAUSAL EXCLUYENTE DE RESPONSABILIDAD EN FALLA DEL SERVICIO

Ha dicho la Sala que el hecho de la víctima puede ser considerado como causal excluyente de responsabilidad si se prueba, no sólo que la víctima participó en la realización del daño, sino que entre su actuación y el daño existe una relación de causalidad adecuada, entendida ésta como aquella causa idónea, eficiente y preponderante, cuya consecuencia directa e inmediata es el daño mismo:

"...la aceptación de la causa extraña como causal liberatoria de la presunción de responsabilidad es, en el fondo, la consagración de la teoría de la causalidad adecuada... aplicando la teoría de la causalidad adecuada, el juez considera que la causa externa ha sido el hecho que normalmente ha producido el daño, y, en consecuencia, el vínculo de causalidad debe romperse de tal modo, que el demandado no se considere jurídicamente como causante del daño."

Se logra advertir que ninguna de las pruebas que se pretende hacer tiene como objeto los antes señalados, lo que permite afirmar, que la falla en el servicio, se encuentra huérfana de prueba.

FRENTE A LA IMPUTABILIDAD

Se pretende endilgar las consecuencias del presunto accidente ocurrido el día 12 de abril de 2023 a mi prohijado el Municipio de Santiago de Cali hoy Distrito Especial afirmando la existencia de un hueco como causa eficiente.

Corresponde entonces a la parte demandante, demostrar en este punto, que existió la falla en el servicio de igual manera que la misma haya sido la causa que dio lugar al daño antijurídico generado, lo cual hasta a esta altura procesal no se ha demostrado.

En relación con el tema, es pertinente traer a colación lo esgrimido por el Consejo de Estado en sentencia de octubre de 1.995, Expediente 9535, señaló:

"Por lo anterior, los hechos objeto del proceso deben manejarse dentro del régimen de la falla ordinaria o probada, en el cual al demandante le incumbe la demostración de todos los elementos que configuran la responsabilidad estatal."



"Y, toda vez que se imputa una omisión administrativa, la parte actora debe, además de probar la existencia del perjuicio y su relación de causalidad con la omisión de la cual él se deriva, acredita la existencia de la obligación legal o reglamentaria que imponía a la administración la realización de la conducta con la cual los perjuicios no se habrían producido. O, lo que es lo mismo, debía acreditar la existencia de la falla del servicio consistente en el cumplimiento de un deber y demostrar que dicha falla fue la causante del daño".

Como bien se puede colegir, la parte demandante a esta instancia judicial no ha demostrado que haya existido la falla en el servicio que predican se materializo, así como tampoco han probado el nexo causal entre la presunta falla aludida y el daño.

Es necesario advertir nuevamente que no existe evidencia clara que indique que las lesiones sufridas por la señora ELENA PATRICIA ACEVEDO RIVAS, se hayan producido por la existencia de un hueco en la vía, pues de los documentos aportados con la demanda, tales como el informe policial de accidente de tránsito, la historia clínica, entre otros, son pruebas que resultan inoperantes para indicar que, de aceptar como cierta que las lesiones sufridas por la demandante sean a consecuencia de la existencia de un hueco en la vía, ello automáticamente se traduzca en una falla del servicio.

Véase como en la actualidad, en diferentes zonas de la ciudad, encontramos huecos, baches, y desgastamiento asfáltico, que tienen como origen el mejoramiento vial que se ha emprendido por parte de la Administración, y que evidentemente no se le puede señalar como una falla del servicio, pues por el contrario, su naturaleza es la del cumplimiento de un deber legal.

En virtud de la anterior postura, la parte actora no ha probado, que si en efecto existía un hueco, el origen de éste escapaba a una causa legítima, así como que ausente estaba la vía de señalización acerca de su existencia.

Se corrobora con el acervo probatorio arrimado al plenario, ninguna de las pruebas que se pretenden hacer valer por la parte demandante, tienen como objeto los antes señalados, lo que permite afirmar, que la falla en el servicio, se encuentra huérfana de prueba fehaciente.

VIII. PROPOSICIÓN DE EXCEPCIONES:

1. INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD POR CARENCIA DE NEXO CAUSAL QUE COMPROMETA AL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI CON LOS PRESUNTOS PERJUICIOS MATERIALES E INMATERIALES SUFRIDOS POR LA PARTE ACTORA:

Como se ha indicado en líneas que antecede, no basta con afirmar que había un hueco en la vía y que la señora ELENA PATRICIA ACEVEDO RIVAS, se accidentó allí, pues tal afirmación no es suficiente para atribuir responsabilidad al DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, toda vez, que en el proceso no se encuentran los elementos suficientes para determinar la ocurrencia del hecho en los términos planteados en la demanda. Por el contrario, del análisis o estudio hecho al Informe de Accidente de Tránsito allegado como prueba, nacen serias dudas sobre si la causa del accidente sea la presencia de un foramen en la vía.

Es así entonces, que debe examinarse la situación bajo el régimen de la falla probada, en la cual la demandante le incumbe la demostración de todos los elementos que configuran la responsabilidad estatal, y que se imputa una omisión administrativa, corresponde a la parte actora probar la existencia del perjuicio y su relación de causalidad con la omisión de



la cual él se deriva, acreditar la existencia de la falla del servicio consistente en el cumplimiento de un deber y demostrar que dicha falta fue la única causante del daño.

De lo anterior se concluye que en el presente caso la demandante no ha demostrado el nexo causal entre la falla en el servicio y el daño causado, en tanto considera que, o el hecho no ocurrió, o no lo fue en las circunstancias que se indican en la demanda, pues la causa del accidente se debió a la imprudencia y a la falta de la observancia de las normas del tránsito de parte del conductor.

2. AUSENCIA DE LA FALLA EN EL SERVICIO.

Carece de evidencia la demanda, dirigida a establecer la existencia de huecos en la vía, que se pretende hacer ver como falla en el servicio, y de aceptar su existencia, difícil resulta afirmar que ello se traduzca automáticamente en irregularidad. Lo propio es que los demandantes demuestren que, si en efecto existió un hueco y si su origen escapaba a una causa legítima, así como que ausente estaba la vía de señalización acerca del mismo.

3. AUSENCIA DE PRUEBAS PARA DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD AL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI:

En el presente petitum, existe una evidente carencia probatoria respecto a la acreditación de las circunstancias determinantes en que se presentó el accidente; no existe material probatorio que permita establecer la presunta falla del servicio que pretende la parte convocante sea imputada al DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.

Debe considerarse que no obra prueba idónea que demuestre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que supuestamente ocurrió el accidente que permita corroborar la realidad fáctica de los hechos de la convocatoria, y por ende la causa eficiente del mismo.

En efecto, hay una **ausencia de material probatorio** que permita estructurar una responsabilidad a cargo del Ente Público, quedando demostrado que las causas que originaron el mismo, no son consecuencia de la responsabilidad de la entidad que represento y por lo tanto no está obligado a indemnizar daño alguno.

La demandante señora ELENA PATRICIA ACEVEDO RIVAS, no logra probar que la existencia del hueco en la vía, fue la causa eficiente del accidente acaecido en fecha del 12 de abril de 2023. Por otra parte, en la lectura realizada del Informe Policial de Accidente de Tránsito No. A001526299 del 13 de abril de 2023 allegado como prueba junto con la demanda, quedan serias dudas sobre si la causa del accidente sea la presencia de un foramen en la vía.

4. CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA:

Esta conducta culposa está definida por la Jurisprudencia como aquella que produce un resultado típico producto de la infracción a un deber objetivo de cuidado, que se presenta al no prever los efectos nocivos de un acto o habiéndolos previsto confiar imprudentemente en poder evitarlos. Se constituye diversos eventos que dan lugar a que devenga imposible imputar, desde el punto de vista jurídico, la responsabilidad por los daños cuya causación



da lugar a la iniciación del litigio, a la persona o entidad que obra como demandada dentro del mismo.

Tres son los elementos cuya concurrencia tradicionalmente se ha señalado como necesaria para que sea procedente admitir su configuración: (i) su irresistibilidad; (ii) su imprevisibilidad y (iii) su exterioridad respecto del demandado.

El Estatuto de la Administración de Justicia, Ley 270 de 1996 en el artículo 70 dispone que:

"Artículo 70. Culpa Exclusiva de la Víctima: El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado"

Referente a la conducción como actividad de riesgo la Corte Suprema de Justicia en Sentencia C- 1090 de 2003 expresó:

"la conducción de vehículos automotores es una actividad de suyo peligrosa. A nadie escapa la alta dosis de peligro o riesgo, que se suma al connatural del ejercicio de la actividad peligrosa de la conducción de automotores, de verse expuesto a una colisión o a cualquier otra vicisitud por el uso indiscriminado que de la vía se hacía"

Sobre la denominada "Acción a propio riesgo", el Doctor Enrique Gil Botero en su libro responsabilidad extracontractual del Estado, Sexta edición, expuso:

"Este instrumento, permite establecer cuando el daño es única y exclusivamente atribuible a la propia víctima, en tanto desconoció su deber de autoprotección y, por tanto, la defraudación del rol y la concreción del riesgo es producto de su actuar. Por consiguiente, es requisito indispensable que la víctima sea un sujeto capaz y tenga pleno discernimiento".

Como se aprecia, el fundamento de este elemento se halla en el deber de autoprotección, circunstancia por la que en los supuestos en los que el daño sea producto del actuar determinante y exclusivo de ese sujeto, en tanto asume el riesgo materializado, se enerva la posibilidad de atribuir el daño en cabeza de otro de los sujetos intervinientes.

Los requisitos que exige la Doctrina para que opere la figura son I) La víctima debe tener el control sobre el sí y el cómo del desarrollo de la situación peligrosa; II) la Víctima debe ser un sujeto auto responsable, con capacidad para comprender la dimensión del riesgo y este debe ser conocido por aquella; iii) el tercero no debe tener una especial situación de protección frente al bien jurídico (no debe tener posición de garante frente a la víctima)".

En el caso hoy objeto de Litis y conforme al acervo probatorio aportado con el escrito de demanda, es posible concluir que la demandante no respetó las normas para la conducción de vehículos, perdiendo el control de su motocicleta de placas HSR-20D, lo cual se traduce en una de las causales exonerativas denominada la Culpa de la Víctima. Ésta excepción cobra mayor fuerza, al analizar que la señora ELENA PATRICIA ACEVEDO RIVAS, se desplaza en su motocicleta, perdiendo el control de la misma, del cual no es posible determinar cuál fue la causa eficiente.

5. ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA:

Conforme a los argumentos esbozados en el acápite denominado declaraciones y condenas, me permito reiterar que los perjuicios aquí reclamados carecen de fundamento y de toda prueba como quiera que (i) no se evidencia soportes consistentes en facturas, recibos de caja, ni ningún otro elemento que dé cuenta de las supuestas erogaciones en que han debido incurrir el demandante a raíz del accidente de tránsito material de controversia; (ii) En el presente no existe responsabilidad por parte del DISTRITO DE



SANTIAGO DE CALI razón por la cual mal podría condenarse a resarcir un daño no causado por él.

En este orden de ideas, no es viable imponer una condena y ordenar el resarcimiento de un detrimento por perjuicios no demostrados o presuntos, o si se carece de la comprobación de su magnitud y realización, ya que es inadmisibles la presunción en esa materia, de manera que una indemnización sin fundamentos fácticos ni jurídicos necesariamente se traducirá en un lucro indebido, como sucedería en un caso como el presente.

6. FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA POR ACTIVA

Se propone dicha excepción atendiendo que no fue aportado documento que acredite la legitimación del señor Juan Esteban Gómez Acevedo.

Dentro de los hechos de la demanda se indica que el citado señor es el hijo de la señora ELENA PATRICIA ACEVEDO RIVAS; sin embargo, no es aportado el registro civil de nacimiento del señor Gómez Acevedo que permita acreditar tal aseveración.

7. GENÉRICA O INNOMINADA:

La fundamentación en todos los hechos exceptivos que demostrados en el proceso sean favorables a la parte que represento.

IX. LLAMAMIENTO EN GARANTÍA:

En escrito separado a esta contestación de demanda se está efectuando llamamiento en garantía por ser la entidad compañía ASEGURADORA MAPFRE junto con las compañías de seguros AIG COLOMBIA SEGUROS GENERALES hoy SBS SEGUROS, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. y MAPFRE SEGUROS GENERALES estas últimas en su condición de coaseguradoras, que para la fecha de ocurrencia de los hechos, tenían contrato vigente con el Municipio de Santiago de Cali hoy Distrito Especial.

X. PRUEBAS:

Solicito que se tengan como pruebas las presentadas en el presente escrito de contestación.

XI. FACULTAD PARA CONTRAINTERROGAR:

Solicito me sea autorizado contra interrogar a los testigos enunciados en el ítem de testimoniales del escrito de demanda, así como a las partes que fueron pedidos como pruebas por el apoderado judicial de la parte actora, salvo el representante de este Ente Territorial, del cual se solicitó no se decretará; en las audiencias respectivas, para recepción de testimonios que sean decretados por su Despacho.

XII. ANEXOS:

Anexo al presente escrito los siguientes documentos:

1. Poder con sus respectivos anexos.
2. Copia de escrito de llamamiento en garantía con sus anexos.
3. Copia autentica de la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1507223000670 de la ASEGURADORA MAPFRE, con el fin de que se haga parte en el presente proceso; con vigencia desde el 1 de marzo al 16 de noviembre de 2023. (6 folios)
4. Copia de los Certificados de Existencia y Representación de Cámara de comercio de la Compañía MAPFRE SEGUROS GENERALES y Coaseguro Compañías, AIG COLOMBIA SEGUROS GENERALES hoy SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA y CHUBB SEGUROS DE COLOMBIA S.A.
- 5.

XIII. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS:

En cumplimiento al párrafo primero del artículo 175 de la Ley 1437 del 2011, se solicitó a la Secretaria de Movilidad copia de los antecedentes administrativos mediante comunicación No. 202441210100015234.

XIV. NOTIFICACIONES:

Las personales en la Secretaría de su Despacho o en el CAM torre Alcaldía piso 9 Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública, ubicado en la Avenida 2N No. 10-70 de Santiago de Cali, correo electrónico: notificacionesjudiciales@cali.gov.co y/o lkrojasca@gmail.com

Las de las llamadas en garantía en los siguientes correos:

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTE LEGAL	CORREO ELECTRÓNICO
Mapfre Seguros Generales Nit: 891700037-9	Jorge Enrique Riascos Varela o Quien haga sus veces	njudiciales@mapfre.com
AIG Colombia Seguros Generales hoy SBS Seguros Colombia S.A. Nit. 860.037.707-9	Martha Lucia Pava Vélez o Quien haga sus veces	notificaciones.sbsegueros@sbsegueros.co
Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa Nit 860.524.654-6	Francisco Andrés Rojas Aguirre o Quien haga sus veces	notificaciones@solidaria.com.co
CHUBB Seguros Colombia S.A. Nit 860026518-6	Fabio Cabral da Silva o Quien haga sus veces	notificacioneslegales.co@chubb.com



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA

Los demás sujetos procesales, las contenidas en el documento de la presentación de la demanda y de la notificación electrónica realizada por el Despacho.

De su Despacho Atentamente;

LUZ KARIME ROJAS CAMACHO
LUZ KARIME ROJAS CAMACHO

C. C. N.º 27.603.477 de Cúcuta (N. de Stder)

T. P. N.º 156.065 del C. S. de la J.

Correo Electrónico: notificacionesjudiciales@cali.gov.co

lkrojasca@gmail.com



Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 9
Teléfono: 6617084-85 www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA

WILMER TABARES MARIN
Secretario de Movilidad
Cra 3 #56-90 Barrio Salomia
E. S. D.



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 202441210100015234

Fecha: 2024-04-03

TRD: 4121.010.9.16.418.001523

Rad. Padre: 202441210100015234

Asunto: Antecedentes Administrativos (numeral 4 parágrafo 1 del artículo 175 del C.P.A.C.A.).

Radicación: 76001-33-33-001-2023-00294-00

Demandante: Elena Patricia Acevedo Rivas y otros

Demandado: Distrito Especial de Santiago de Cali

Medio de Control: Reparación Directa

Cordial saludo,

MARIA XIMENA ROMAN GARCIA, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía número 66.811.466, en mi condición de Directora del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, nombrada mediante Decreto No.4112.010.20.0001 de 01 de enero de 2024 y Acta de Posesión No. 016 de 01 de enero de 2024, debidamente facultada por el Doctor ÁLVARO ALEJANDRO EDER GÁRCES, identificado con la cédula de ciudadanía número 94.453.964, en su condición de Alcalde del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicio de Santiago de Cali y representante legal del mismo, según Decreto No. 4112.010.20.0010 de enero 03 de 2024 "Por medio del cual se efectúa una delegación en materia de representación judicial, administrativa y extrajudicial, y se dictan otras disposiciones", con facultad para actuar en nombre y representación de la entidad ante las autoridades administrativas y jurisdiccionales, respetuosamente me dirijo a usted, a efectos de solicitar el informe Policial de accidente de tránsito No. A001526299 y los documentos que en pro de dicho informe policial se hayan emitido en caso de que los hubiese.

Lo anterior, conforme a las funciones y responsabilidades contenidas en el Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016¹, cuyo propósito principal es el "Asesorar a la

¹ Por el cual se determina la estructura de la Administración Central y las funciones de sus dependencias.



SC-CER652615

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 09
Teléfono: 6617084-85 www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA

administración central municipal en la unificación de la postura jurídica, a partir de la aplicación uniforme de las normas, la jurisprudencia y el precedente jurisprudencial" y "Defender los intereses litigiosos de la entidad territorial ante los distintos estrados judiciales y administrativos, de conformidad con la delegación y poderes que para el efecto expida el Alcalde Municipal"² dentro del proceso de la referencia.

Dicha información es solicitada conforme lo estipula el numeral 4 parágrafo 1 del artículo 175 del C.P.A.C.A. para que repose en el medio de control de Reparación Directa en referencia, admitida por el Juzgado Primero (01) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali, mediante auto interlocutorio No. 56 del 6 de febrero de 2024, notificada ante el correo electrónico del ente territorial notificacionesjudiciales@cali.gov.co.

MARIA XIMENA ROMÁN GARCÍA
Directora de Departamento Administrativo.

Proyectó: Luz Karime Rojas Camacho – Contratista

Revisó: María Fernanda Rivera Meneses – subdirectora de Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijurídico

² Artículo 54. numeral 4 y 5



SC-CER652615

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 09
Teléfono: 6617084-85 www.cali.gov.co

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
**INICIACION
ORIGINAL**

Ref. de Pago: 31578954856

 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

INFORMACION GENERAL

RAMO / PRODUCTO	POLIZA	CERTIFICADO	FACTURA	OFICINA MAPFRE	DIRECCION	CIUDAD
272 730	1507223000670	0	1	CALI	CARRERA 80 # 6-71 BRR CAPRI	CALI
TOMADOR	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI				NIT / C.C.	8903990113
DIRECCION	AV 2 N 10 70 DE CEN				TELEFONO	6800810
			CIUDAD	CALI		
ASEGURADO	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI				NIT / C.C.	8903990113
DIRECCION	AV 2 N 10 70 DE CEN				TELEFONO	6800810
			CIUDAD	CALI		
ASEGURADO	N.D.				NIT / C.C.	N.D.
DIRECCION	N.D.				TELEFONO	N.D.
			CIUDAD	N.D.		
BENEFICIARIO	CUALQUIER TERCERO AFECTADO				NIT / C.C.	N.D.
DIRECCION	N.D.				TELEFONO	N.D.
			CIUDAD	N.D.		

INFORMACION DE LA POLIZA

FECHA DE EXPEDICION			VIGENCIA POLIZA					VIGENCIA CERTIFICADO						
DIA	MES	AÑO	INICIACION TERMINACION	HORA	DIA	MES	AÑO	No. DIAS	INICIACION TERMINACION	HORA	DIA	MES	AÑO	No. DIAS
7	3	2023		00:00	1	3	2023	260		00:00	1	3	2023	260
				00:00	16	11	2023			00:00	16	11	2023	

PARTICIPACION DE INTERMEDIARIOS

NOMBRE DEL PRODUCTOR	CLASE	CLAVE	TELEFONO	% PARTICIPACION
ARTHUR J GALLAGHER CORREDORES DE SEGUROS SA	CORREDOR	1901	6191300	40,00
ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S A	CORREDOR	1016	3394751	60,00

 ACTIVIDAD : OFICINA PUBLICA O GUBERNAMENTA
 DIRECCION DEL RIESGO : AV 2 NORTE # 10-70 CAM P 16
 DEPARTAMENTO : VALLE
 CIUDAD : CALI


(415)7707289180029(8020)031578954856(3900)1017205479(96)20230301

COBERTURAS
VALOR ASEGURADO
DEDUCIBLE

P.L.O.: PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	\$ 5.000.000.000,00	\$ 5.000.000.000,00	5 % PERD Min 2 (SMMLV)
Responsabilidad Civil patronal	\$ 2.100.000.000,00	\$ 3.500.000.000,00	5 % PERD Min 2 (SMMLV)
Gastos medicos y hospitalarios	\$ 500.000.000,00	\$ 2.500.000.000,00	NO APLICA
Responsabilidad Civil parqueaderos	\$ 2.000.000.000,00	\$ 3.000.000.000,00	5 % PERD Min 2 (SMMLV)
Responsabilidad Civil para contratistas y subcontratistas	\$ 5.000.000.000,00	\$ 5.000.000.000,00	5 % PERD Min 2 (SMMLV)
Responsabilidad Civil Vehiculos propios y no propios	\$ 2.500.000.000,00	\$ 2.500.000.000,00	5 % PERD Min 2 (SMMLV)
Responsabilidad Civil productos	\$ 3.500.000.000,00	\$ 3.500.000.000,00	5% PERD Min 2 (SMMLV)
Responsabilidad Civil cruzada	\$ 5.000.000.000,00	\$ 5.000.000.000,00	5 % PERD Min 2 (SMMLV)

SE ANEXAN Condiciones Generales y Particulares:
Observaciones:

LAS PARTES ACUERDAN QUE EL TOMADOR PAGARA LA PRIMA DE LA PRESENTE POLIZA, A MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA INICIACION DE LA VIGENCIA DE LA MISMA, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA, PRODUCIRA LA TERMINACION DE LA POLIZA Y DARA DERECHO A MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. A EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICION DEL CONTRATO Y SUS CERTIFICADOS Y ANEXOS.

Aplica el Condicionado General Codigo: 15/04/2021-1326-P-06-00000VTE390ABR21-D001

TOTAL PRIMA NETA PESOS COLOMBIANOS	GASTOS DE EXPEDICION PESOS COLOMBIANOS	SUBTOTAL EN PESOS COLOMBIANOS	VALOR IMPUESTO A LAS VENTAS PESOS COLOMBIANOS	TOTAL A PAGAR EN PESOS COLOMBIANOS
\$ 854.794.521,00	\$ 0,00	\$ 854.794.521,00	\$ 162.410.958,00	\$ 1.017.205.479,00

PARTICIPACION DE COASEGURADORAS

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURADORA	TIPO DE COASEGURO	%PARTICIPACION	\$ PRIMA PESO COLOMBIANO-S	FIRMA
AIG COLOMBIA SEGUROS GENERALES	CEDIDO	20,00%	\$ 170.958.904,20	
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOM	CEDIDO	22,00%	\$ 188.054.794,62	
CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA	CEDIDO	28,00%	\$ 239.342.465,88	
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE CO	CEDIDO	30,00%	\$ 256.438.356,30	

INFORMACION GENERAL

RAMO / PRODUCTO	POLIZA	OPERACION	OFICINA MAPFRE	DIRECCION	CIUDAD
370 730,00	1507223000670		107*CALI	CARRERA 80 # 6-71 BRR CAPRI	CALI

ANEXOS

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL LICITACIÓN PÚBLICA No. 4181.010.26.1.007-2023

TOMADOR: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI

ASEGURADO: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI

 REGIMEN COMUN SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RESOLUCION 2509 DE DICIEMBRE 3/93, AGENTE RETENEDOR DEL IVA, SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN 5098 DE JUNIO 21 DE 2013.
 ESTE DOCUMENTO EQUIVALE A UNA FACTURA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 5 DECRETO 1165/96

MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA

TOMADOR

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

INICIACION
ORIGINAL

Ref. de Pago: 31578954856

ASEGURADO: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI

BENEFICIARIO: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI

NIT. 890.399.011-3

VIGENCIA: desde las 00:00 horas del 01/03/2023 hasta las 00 horas del 16/11/2023

1. Objeto del Seguro

Amparar los perjuicios patrimoniales y extra patrimoniales incluyendo los perjuicios morales y de vida en relación y el lucro cesante, que cause a terceros el asegurado, con motivo de la responsabilidad civil en que incurra o le sea imputable de acuerdo con la Ley colombiana, durante el giro normal de sus actividades.

2. Tipo de Póliza

La Entidad ha venido contratando, bajo la modalidad de ocurrencia, pólizas de responsabilidad civil desde hace más de cinco años.

3. Modalidad de Cobertura

Ocurrencia: Se cubren todos los perjuicios que se generen durante la vigencia del seguro, sin tener en consideración la fecha en la cual sean reclamados por los terceros.

4. Jurisdicción Colombiana

5. Límite Territorial

Cobertura Mundial se suscribe a los viajes de funcionarios, participación en ferias exposiciones y eventos en representación de la entidad - Aplica legislación colombiana.

6. Tomador y Asegurado

DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI

* Nómina promedio mensual (2022): \$34.758.432.684

* Número de funcionarios (2022): 10.059

* Presupuesto anual de funcionamiento (2022): \$827.176.246.782

7. Beneficiario

Terceros afectados, víctimas o sus causahabientes y/o Empleados y/o familiares de empleados

8. Límite asegurado opera por Evento o Vigencia \$5.000.000.000

9. Cobertura

La compañía se obliga a indemnizar, los perjuicios patrimoniales y extra patrimoniales hasta el 100% del valor asegurado, que cause el asegurado con motivo de la responsabilidad civil extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley colombiana, por hechos imputables al asegurado, que causen la muerte, lesión o menoscabo en la salud de las personas (daños personales) y/o el deterioro o destrucción de bienes (daños materiales) y perjuicios económicos, incluyendo lucro cesante y perjuicios extra patrimoniales, como consecuencia directa de tales daños personales y/o daños materiales. Se extiende la presente cobertura a los perjuicios patrimoniales y extra patrimoniales causados a terceros, que le sean imputables al DISTRITO de Santiago de Cali y que se deriven de las actividades desarrolladas por los Teatros Municipal y Jorge Isaac, y que sean lideradas y ejecutadas por Contratistas o Terceros. Se extiende a cubrir la Responsabilidad Civil Extracontractual por el uso de Bicicletas

Adicionalmente la compañía será responsable hasta el límite asegurado en la póliza por:

A. Todos los gastos y expensas judiciales decretados a favor de cualquier reclamante contra el asegurado.

B. Todos los honorarios de abogado, gastos y expensas judiciales en que haya incurrido el Asegurado, tanto para la etapa de conciliación extrajudicial como para el proceso judicial, con el consentimiento escrito de la compañía para oponerse a cualquier reclamo.

C. Asistencia jurídica en proceso penal y civil.

D. Se aclara que la compañía NO será responsable por multas y sanciones de la Administración.

Predios, labores y operaciones (PLO)

Actividades de cargue, descargue y transporte de bienes, incluyendo eventualmente los azarosos e inflamables.

Se excluye daños al vehículo transportador y daños a la carga.

Actividades deportivas, culturales y sociales.

REGIMEN COMUN SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RESOLUCION 2509 DE DICIEMBRE 3/93, AGENTE RETENEDOR DEL IVA, SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN 5098 DE JUNIO 21 DE 2013.
ESTE DOCUMENTO EQUIVALE A UNA FACTURA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 5 DECRETO 1165/96



MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA

TOMADOR

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

INICIACION
ORIGINAL

Ref. de Pago: 31578954856

Avisos, vallas y letreros (instalados por el Asegurado y/o por contratistas del Asegurado) dentro y fuera de predios

Contaminación accidental, súbita e imprevista. Sublímite del 10% del límite asegurado por Evento / 20% del límite asegurado por vigencia

Contratistas y subcontratistas independientes incluyendo trabajos de mantenimiento, reparaciones y modificaciones de predios. Sublímite \$7.000.000.000 por evento o persona, y \$5.000.000.000 por vigencia, las cuales operarán en exceso de las pólizas de los contratistas y subcontratistas encargados de la(s) obra(s).

Perjuicios causados por directivos, representantes y empleados del asegurado, en el desempeño de sus funciones y dentro de las actividades del asegurado, dentro y fuera de Colombia, incluyendo en viajes. Excluye RC Profesional y D&O

Daños y hurto de vehículos y/o accesorios originales en predios del asegurado, parqueaderos de su propiedad o sobre los cuales ejerza tenencia o control el asegurado. Sublímite \$2.000.000.000 por evento, y \$3.000.000.000 por vigencia.

No aplicación de garantías. Mediante la presente cláusula queda entendido, convenido y aceptado que no obstante lo que se establezca en las condiciones generales y particulares de la póliza, la Compañía no impondrá al asegurado el cumplimiento de determinada garantía ni a cumplir determinada exigencia y que en cambio la Compañía acepta las condiciones de protección, mantenimiento, conservación y control que el asegurado de a sus bienes.

Eventos sociales organizados por el asegurado, desarrollados dentro y fuera de sus predios.

Incendio ó rayo y explosión.

Participación del asegurado en ferias y exposiciones nacionales.

Posesión, uso y mantenimiento de depósitos, tanques y tuberías o redes.

Responsabilidad civil cruzada. Queda entendido y convenido que la presente cobertura se extiende a amparar las reclamaciones presentadas entre si por cada uno de los contratistas que desarrollen simultáneamente proyectos relacionados con la misión y objeto del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, en la misma forma en que se aplicaría si a cada uno de ellos se hubiera expedido una póliza por separado. Sublímite Asegurado: \$5.000.000.000

Uso de armas de fuego y errores de puntería, incluye empleados contratados por la entidad y contratistas para labores de vigilancia o personal de seguridad y uso de perros guardianes. Para empleados de firmas especializadas en vigilancia opera en exceso de sus propias pólizas; para los demás empleados opera al 100% en el amparo básico.

Responsabilidad civil servicio de vigilancia. Sublímite \$2.100.000.000 evento/vigencia. Opera en exceso de las pólizas del contrato de vigilancia

Responsabilidad civil patronal en exceso de la seguridad social. Sublímite de \$ 2.100.000.000 evento persona y \$3.500.000.000 por vigencia. Opera en exceso de las prestaciones legales económicas de la seguridad social derivadas de los eventos ATEP, cualquier otro seguro obligatorio que haya sido contratado o debido contratar para tal fin y de acuerdo con lo establecido en el Art. 216 del CST.

Restaurantes y cafeterías, campos deportivos, clubes y casinos.

Uso de ascensores, elevadores, escaleras automáticas, grúas, montacargas, cabrias, carretas, carros plataformas y equipos de trabajo y transporte dentro de predios.

Responsabilidad Civil Productos. Sublímite por evento y agregado anual \$3.500.000.000 se excluyen Exportaciones a Estados Unidos y Canadá.

Responsabilidad civil Maquinaria y Equipos (Para cubrir la responsabilidad que se origine en la maquinaria y equipos amparados en la póliza de maquinaria y equipo). Sublímite \$2,000,000,000 evento/\$4,000.000.000 vigencia, el cual opera en exceso de la póliza de Todo Riesgo Equipo y Maquinaria

Daño emergente hasta el 100% del límite asegurado

Lucro cesante hasta el 100% del límite asegurado

Daños extra patrimoniales incluyendo los perjuicios morales y de vida en relación hasta el 100% del límite asegurado

Otras Propiedades Adyacentes. Sublímite asegurado: \$ 3,500,000,000. Por Evento/Vigencia.

10. Cláusulas y/o condiciones adicionales

Para aquellas cláusulas y/o condiciones adicionales para las que no se indique sublímite se entenderá que estas operan al 100%.

Cláusula de aplicación de condiciones particulares. Queda expresamente acordado y convenido, que la Compañía acepta las condiciones básicas técnicas establecidas en este anexo en los términos señalados en el mismo; por lo tanto, en caso de existir discrepancia entre los ofrecimientos contenidos en las CONDICIONES BASICAS TÉCNICAS OBLIGATORIAS frente a la propuesta, los textos de los ejemplares de las pólizas, certificados, anexos o cualquier otro documento; prevalecerá la información y condiciones enunciadas en las CONDICIONES BASICAS TÉCNICAS OBLIGATORIAS establecidas.

Amparo automático para nuevos predios y/o operaciones, con aviso de 60 días. La compañía aseguradora contempla la extensión de la cobertura automática del seguro, en los mismos términos y limitaciones establecidos en esta póliza, para amparar la responsabilidad extracontractual por nuevas operaciones y/o el uso, posesión y demás actividades desarrolladas en nuevos predios que adquiera el asegurado o sobre los cuales obtenga el dominio o control.

Ampliación del plazo para aviso de siniestro a 60 días. El Asegurado notificará todos los siniestros por vía telefónica, o por mensaje de telefax o e-mail lo más pronto posible y con no más de sesenta (60) días posteriores al conocimiento de la reclamación judicial o extrajudicial efectuada por la(s) víctima(s) que pueda tener relación con este seguro.

Anticipo de indemnización del 50% se contempla bajo esta cláusula que en caso de siniestro y a petición escrita del asegurado, anticipará pagos parciales del valor del reclamo,

REGIMEN COMUN SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RESOLUCION 2509 DE DICIEMBRE 3/93, AGENTE RETENEDOR DEL IVA, SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN 5098 DE JUNIO 21 DE 2013.
ESTE DOCUMENTO EQUIVALE A UNA FACTURA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 5 DECRETO 1165/96



MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA

TOMADOR

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

INICIACION
ORIGINAL

Ref. de Pago: 31578954856

con base en el valor de la estimación preliminar de la pérdida (No se acepta el requerimiento de ningún requisito adicional para realizar el anticipo). En caso de que el anticipo o suma de anticipos que la compañía adelante al asegurado llegare a exceder la suma total indemnizable a que tenga derecho, éste se compromete a devolver inmediatamente el exceso pagado. En ningún caso la indemnización podrá ser mayor al 100% del valor de la pérdida demostrada.

Solución de conflictos o controversias. Los conflictos que surjan durante la ejecución del objeto contractual, se solucionarán preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo, amigable composición, transacción y conciliación, como lo establece el artículo 68 de la ley 80 de 1993.

Conocimiento de los predios y/o actividades por parte del asegurado. La Aseguradora manifiesta que conoce el riesgo y que partiendo de esta base ha hecho la tasación y ha establecido los términos y condiciones para la contratación de esta cobertura, por consiguiente deja constancia del conocimiento y aceptación de los riesgos, las circunstancias y condiciones de los mismos.

Costos de cualquier clase de caución judicial. Sublímite \$100.000.000 por evento/vigencia

Costos e intereses de mora. En adición a las indemnizaciones a que haya lugar, la compañía reembolsará al Asegurado los gastos que se generen con ocasión de: la Condena en costo e intereses de mora acumulados a cargo del Asegurado, desde cuando la sentencia se declare en firme hasta cuando la compañía haya reembolsado al Asegurado o consignado en nombre de éste en el juzgado, su participación en tales gastos.

No concurrencia de deducibles. De presentarse un evento indemnizable bajo la póliza, en cualquiera de sus secciones o por cualquiera de los riesgos cubiertos por la misma que afecte dos o más artículos o bienes amparados y si en los mismos figuran deducibles diferentes, para los efectos de la liquidación del siniestro se aplicará únicamente el deducible cuya cobertura se afectó por el origen del siniestro y no la sumatoria de ellos.

Designación de ajustadores. Queda entendido, convenido y aceptado que, en caso de siniestros amparados por la presente póliza que requieran la asignación de un perito ajustador, la Aseguradora efectuará su contratación previo acuerdo y aprobación del Asegurado.

Delimitación Temporal. Se anula toda delimitación temporal respecto al alcance de la cobertura (excepto por prescripción), que se establezca en las condiciones generales ó particulares de la póliza.

Definición de Terceros. Se deja constancia que los concejales, estudiantes y el personal al servicio del DISTRITO de Santiago de Cali bajo cualquier denominación, los contratistas, subcontratistas, y en general cualquier persona natural o jurídica que tenga una relación con esta entidad, se considerarán terceros para efectos de cualquier reclamación que deban formularle, pero exceptuando la responsabilidad que se derive de la ejecución de contratos.

Se consideran terceros las entidades o personas que se encuentran en predios del DISTRITO de Santiago de Cali y que desarrollan sus propias actividades de manera independiente a las ejecutadas por el DISTRITO.

Condiciones técnicas y económicas de seguro y reaseguro. La compañía deberá conservar sus Reaseguradores durante el período de adjudicación y no podrán cambiarlos salvo fuerza mayor o causa justificada. En caso de ser necesario cambiarlos ó que el reasegurador se retire voluntariamente, él (ó los) reasegurador(es) que lo sustituya(n) deberá(n) ser de la misma categoría ó tener la misma calificación del (os) que se reemplaza (n).

Durante el período de adjudicación los oferentes no podrán cambiar las condiciones técnicas y económicas ofrecidas salvo aquellas que sean favorables al asegurado, las cuales deberán incorporarse automáticamente a las Pólizas.

Errores, omisiones e inexactitudes no intencionales. El tomador está obligado a declarar sinceramente los hechos y circunstancias que determinen el estado del riesgo. La inexactitud sobre hechos o circunstancias que, conocidas por la compañía, la hubieren retraído de celebrar el contrato o inducido a estipular condiciones más onerosas, produce la nulidad relativa del seguro. Sin embargo, si se incurriere en errores, omisiones e inexactitudes imputables al tomador o al asegurado, el contrato no será nulo ni habrá lugar a la aplicación del inciso tercero del artículo 1058 del Código de Comercio sobre reducción porcentual de la prestación asegurada. En este caso se deberá pagar la prima adecuada al verdadero estado del riesgo.

Extensión del sitio ó sitios donde se asegura el riesgo.

Se conviene en amparar en todas sus partes la Responsabilidad Civil del Asegurado, derivada de los perjuicios patrimoniales y extra patrimoniales, causados a bienes de terceros, lesiones personales ó muerte a terceros, por empleados, personal a su servicio, durante el desempeño de sus funciones en el giro normal de sus negocios y en cualquier sitio o sitios, donde se hallen desempeñando las mismas.

Los pasajeros que se movilicen en vehículos que prestan el servicio de transporte, de propiedad del DISTRITO, serán considerados como terceros. Sublímite \$2.000.000.000 evento / vigencia

Gastos médicos, hospitalarios y traslado de víctimas. Sublímite hasta el 20% del límite asegurado por persona y 50% del límite asegurado por vigencia. La compañía reembolsará al asegurado dentro de los términos, con sujeción a las condiciones de este seguro los gastos razonables que se causen por concepto de primeros auxilios inmediatos, servicios médicos, quirúrgicos, de ambulancia, de hospital, de enfermedades y drogas como consecuencia de lesiones corporales producidas a terceros en desarrollo de las actividades específicamente amparadas bajo las condiciones particulares de la presente póliza. El amparo que mediante esta sección se otorga es independiente del de Responsabilidad y por consiguiente, los pagos que por dicho concepto se realizan, en ningún caso pueden ser interpretados como aceptación tácita de responsabilidad. Se aclara que para esa cobertura no se acepta la aplicación de deducibles.

Indemnización por clara evidencia de responsabilidad sin que exista previo fallo judicial. Mediante esta cláusula el Oferente debe contemplar que en caso de siniestro la compañía indemnizará los daños causados por el asegurado a un tercero sin que exista previo fallo judicial, siempre y cuando las circunstancias en que ocurrió el evento den lugar a considerar la responsabilidad o culpa del asegurado.

Modificación de condiciones. Los proponentes deben contemplar bajo esta cláusula, que los cambios o modificaciones a las condiciones de la presente póliza, serán acordados mutuamente entre la compañía y el asegurado. El certificado, documento o comunicaciones que se expidan para formalizarlos debe ser firmado, en señal de aceptación, por un representante legal del asegurado o funcionario autorizado, prevaleciendo sobre las condiciones de esta póliza.

Modificación del estado del riesgo. No obstante, lo estipulado en las condiciones generales de la póliza y sus anexos, se establece una limitación a la obligación que el Asegurado

REGIMEN COMUN SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RESOLUCION 2509 DE DICIEMBRE 3/93, AGENTE RETENEDOR DEL IVA, SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION 5098 DE JUNIO 21 DE 2013.
ESTE DOCUMENTO EQUIVALE A UNA FACTURA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 5 DECRETO 1165/96



MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA

TOMADOR

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

INICIACION

ORIGINAL

Ref. de Pago: 31578954856

notifique los hechos o circunstancias que agraven el riesgo durante la vigencia del contrato, en el sentido, que la aseguradora solo puede invocarla cuando exista relación de causalidad entre la agravación y el siniestro. Se ampararán automáticamente los riesgos cuya agravación se informe, hasta el pronunciamiento del asegurador en contrario

Modificaciones a favor del asegurado. Si durante la vigencia de la póliza se presentan modificaciones a las condiciones de la póliza que representen un beneficio a favor del asegurado, sin que impliquen un aumento a la prima originalmente pactada, tales modificaciones se consideran automáticamente incorporadas a la póliza.

No subrogación contra empleados del asegurado. En virtud del pago de la indemnización, la Compañía se subroga por ministerio de la ley y hasta el valor de su importe en todos los derechos del Asegurado contra las personas responsables del siniestro. El Asegurado no podrá renunciar en ningún momento a sus derechos contra terceros responsables del siniestro. Tal renuncia le acarrearía la pérdida del derecho a la indemnización. La compañía renuncia expresamente a ejercer sus derechos de subrogación contra: Cualquier persona o entidad que sea un Asegurado bajo la póliza. Cualquier filial, subsidiaria y operadora del Asegurado. Cualquier socio, miembro de junta directiva o cualquier empleado o dependiente del Asegurado, salvo el caso en que los daños hayan sido causados intencionalmente por ellos.

Pago de indemnizaciones. No obstante, lo que se estipule en el respectivo presente Contrato, se conviene entre las partes, que el pago de la indemnización o la autorización de reparar el bien afectado por la realización de un riesgo amparado, se hará a quien designe el Asegurado, previa información escrita a la Aseguradora y con la firma de la solicitud de indemnización correspondiente, todo, teniendo en cuenta los controles administrativos que posee EL DISTRITO

Propietarios, arrendatarios o poseedores. Sublímite hasta el 20% del límite asegurado por evento y 40% del límite asegurado por vigencia. Se deberá extender a cubrir todos los gastos que el asegurado este legalmente obligado a pagar por cualquier perjuicio que surja en su calidad de propietario, arrendatario, arrendador o poseedor de cualquier inmueble, aun cuando estos no se hallen, específicamente descritos en la póliza. Queda cubierta igualmente la responsabilidad civil extracontractual del asegurado en caso de modificaciones o construcciones de los mismos inmuebles. Se deberá cubrir la responsabilidad civil de la persona o personas encargadas por contrato de mantenimiento del inmueble y únicamente cuando se encuentren en ejercicio de las funciones que dicho contrato estipule.

Responsabilidad civil derivada de montajes, construcciones y obras civiles para el mantenimiento o ampliación de predios. Sublímite \$3.000.000.000 evento/ \$5.500.000.000 vigencia. (independiente de la póliza que ampara los diferentes contratos celebrados por la Entidad)

Responsabilidad civil derivada del manejo de materias primas y productos. Queda aclarado y convenido que la póliza ampara la responsabilidad civil, como consecuencia del manejo por parte del asegurado, contratista y subcontratista de materias primas y productos de cualquier naturaleza, entendiéndose que toda esta operación puede ser ejecutada directamente por el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI ó contratada. Ampara la responsabilidad civil que sea imputable al asegurado como consecuencia de daños o lesiones a terceros ocasionados únicamente por los productos suministrados por el Distrito de Santiago de Cali

Responsabilidad civil derivada del uso de vehículos propios y no propios. En exceso de la cobertura de automóviles, incluidos los vehículos de funcionarios en desarrollo de actividades para el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI. Sublímite 50% del límite asegurado por evento y/o en el agregado anual.

Ampliación del Plazo Revocación o no renovación de la póliza con aviso anticipado al Asegurado de sesenta (60) días. El Oferente debe contemplar bajo esta cláusula que la póliza podrá ser revocada unilateralmente por la compañía, mediante noticia escrita certificada enviada al asegurado a su última dirección registrada, con una anticipación no menor de sesenta (60) días. Los días de anticipación del aviso serán contados en juntos casos a partir de la fecha de recepción por parte del Asegurado de la noticia escrita certificada.

En el caso de que la aseguradora decida no otorgar renovación o prórroga(s) del contrato de seguro, queda entendido, convenido y aceptado que la Aseguradora deberá dar aviso de ello al asegurado con no menos de sesenta (60) días de antelación a la fecha de vencimiento de la póliza, en caso contrario se dará por entendido que la Aseguradora acepta la renovación o prórroga(s), previa autorización de la Entidad, hasta el límite legal establecido en la Ley 80 de 1993, para la adición de los contratos y manteniendo las mismas condiciones ofertadas en este proceso, siempre y cuando la siniestralidad incurrida de la referida vigencia no supere el 60%

Revocación por parte del asegurado sin penalización. El Oferente debe contemplar bajo esta cláusula que la póliza podrá ser revocada unilateralmente por el Asegurado en cualquier momento de la vigencia del seguro, mediante noticia escrita enviada a su dirección comercial o a su última dirección registrada. La prima de seguro no devengada será liquidada a prorrata.

Selección de profesionales para la defensa: Los profesionales encargados de la defensa, corresponderá al DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, o a los funcionarios que ésta designe, quienes para su aprobación presentarán a la Aseguradora la propuesta correspondiente. La Aseguradora podrá previo común acuerdo con el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, asumir la defensa de cualquier litigio o procedimiento legal a nombre del asegurado, a través de abogados elegidos por éste.

Variaciones del riesgo. La compañía debe autorizar al asegurado para efectuar las modificaciones dentro del riesgo, que juzgue necesarias para el funcionamiento de la industria o negocio. Cuando tales modificaciones varíen sustancial, objetiva y materialmente los riesgos conocidos y aceptados por la compañía, el asegurado estará obligado a avisar de ellas por escrito a la compañía dentro de los noventa (90) días comunes contados a partir del inicio de estas modificaciones, si éstos constituyen agravación de los riesgos.

11. Gastos Adicionales

Se amparan los siguientes gastos en que RAZONABLEMENTE se incurra, los cuales se encuentran contenidos en el límite máximo de indemnización pactado y sin aplicación de deducible:

La póliza se extiende a amparar los siguientes gastos en que razonablemente incurra el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI y para los mismos no aplican deducibles.

Costas legales y honorarios de abogados. Los cuales el asegurado debe asumir en la defensa de sus intereses, como consecuencia de una demanda, por la víctima, de alguna petición, judicial o extrajudicial, aun cuando dicha demanda fuere infundada, falsa o fraudulenta, Sublímite por evento \$200.000.000 / Vigencia \$400.000.000, el cual operará dentro del límite asegurado

Gastos para la demostración del siniestro. Sublímite \$100.000.000 incluido dentro del límite asegurado.

No obstante, lo que se diga en contrario en las condiciones generales y particulares de la póliza, la Aseguradora se obliga a indemnizar los gastos en que necesaria y razonablemente incurra el asegurado con el fin de demostrar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida.

Otros gastos en que haya incurrido el Asegurado en relación con un siniestro amparado. Sublímite \$50.000.000, incluido dentro del límite asegurado

REGIMEN COMUN SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RESOLUCION 2509 DE DICIEMBRE 3/93, AGENTE RETENEDOR DEL IVA, SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION 5098 DE JUNIO 21 DE 2013. ESTE DOCUMENTO EQUIVALE A UNA FACTURA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 5 DECRETO 1165/96



MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA

TOMADOR

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

INICIACION
ORIGINAL

Ref. de Pago: 31578954856

Informe de Siniestralidad: LA aseguradora se obliga a suministrar el informe de la siniestralidad los primeros 5 días de cada mes, que contenga la siguiente información: Fecha de ocurrencia del siniestro, amparo afectado Vigencia desde - hasta, descripción, valor reclamado, valor indemnizado, valor reserva, fecha de pago y estado.

12. Riesgos excluidos

En materia de riesgos excluidos el DISTRITO de Santiago de Cali acepta únicamente los expresamente mencionados como exclusiones absolutas de cobertura las que figuran en el texto del condicionado general depositado por la Aseguradora en la Superintendencia Financiera con anterioridad no inferior a quince (15) días hábiles al cierre del proceso y la Exclusión por COVID-19. Serán válidas las exclusiones relativas consignadas en los mencionados condicionados generales solo cuando no contradigan las condiciones técnicas básicas habilitantes del presente proceso, en cuyo caso prevalecerán las condiciones técnicas básicas habilitantes.

DEDUCIBLES:

TODA Y CADA PERDIDA: 5% DE LA PERDIDA MINIMO 2 SMMLV

GASTOS MEDICOS: SIN DEDUCIBLE

- FIN DE LA SECCION -

REGIMEN COMUN SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RESOLUCION 2509 DE DICIEMBRE 3/93, AGENTE RETENEDOR DEL IVA. SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN 5098 DE JUNIO 21 DE 2013.
ESTE DOCUMENTO EQUIVALE A UNA FACTURA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 5 DECRETO 1165/96



MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA

TOMADOR